EL ADELANTO DE SALAMANCA
SALAMANCA
13/09/12
Prensa: Diaria
Tirada: 6.440 Ejemplares
Difusión: 4.810 Ejemplares
Cód: 61566918
Página: 5
Sección: OPINIÓN Valor: 571,00 € Área (cm2): 296,1 Ocupación: 32,31 % Documento: 1/1 Autor: Julio Fernández Profesor de la Usal Núm. Lectores: 39000

RECORTES EDUCATIVOS

DESDE LA CODE

JULIO FERNÁNDEZ
PROFESOR DE LA USAL

En uno de los refranes que aparecen en la colección *Refranero estudiantil*, publicado por el Consorcio Salamanca 2002, se dice: *A estudio, que enseñan de balde*. La educación se recoge por la mayoría de las Constituciones políticas de los países democráticos como un derecho fundamental de los ciudadanos que, además, en su formación básica, debe ser gratuita. Así lo establece también nuestra Carta Magna en su artículo 27. Pero, ante la crisis económica que estamos padeciendo y con la obsesión del Gobierno de **Rajoy** por reducir el déficit público, se han producido los mayores recortes de la democracia española en el gasto público de educación, que junto a las políticas públicas de sanidad, servicios sociales y justicia, constituyen los pilares básicos del denominado Estado del Bienestar. La Plataforma *Por un nuevo modelo de democracia* ha divulgado a través de las redes sociales una viñeta muy reveladora de cómo se afrontan los recortes educativos en las distintas Comunidades Autónomas.

En la primera parte de la viñeta aparece un maestro escribiendo en la pizarra "la lección de hoy es…" y en la segunda parte de la viñeta se ve a **Esperanza Aguirre** muy sonriente que en una mano porta unas grandes tijeras y en la otra y debajo del brazo, la mitad de la pizarra que la presidenta de Madrid se ha encargado de amputar, imposibilitando que el docente pueda realizar su cometido adecuadamente.

Durante estos días ha comenzado el presente curso escolar de Educación Infantil y Primaria en la mayoría de las regiones del Estado y, debido al crecimiento en términos absolutos de la población española en los últimos años, en este curso habrá más niños en las aulas, algo que lógicamente debería generar un incremento del número de maestros, una mejora de las instalaciones y un aumento de los materiales educativos para ajustarlos a las necesidades reales. Pero ocurre todo lo contrario, el número de alumnos por aula se ha incrementado (y por consiguiente se reduce también el número de aulas), las dotaciones son insuficientes y el coste del material escolar se ha incrementado debido a la subida del IVA. Nos encontramos, por tanto, ante un panorama desolador.

No obstante, era previsible que un Gobierno tremendamente conservador como el actual y que cree poco en lo público y sí en las privatizaciones de los servicios básicos y esenciales de la comunidad, adoptara este tipo de medidas, sobre todo en un contexto de crisis económica, que se convierte en la coartada perfecta para justificar sus políticas regresivas. Un ejemplo de esta filosofía política retrógrada, sectaria y elitista lo tenemos en las declaraciones tanto del Ministro de Educación (**Wert**) como en las de la presidenta de la Comunidad de Madrid (**Aguirre**) sobre la Sentencia del Tribunal Supremo que cuestionaba seriamente la financiación pública de los centros educativos que avalan la segregación educativa entre niños y niñas. En una sociedad pluralista y democrática, niños y niñas (como ocurre con los adultos) deben convivir juntos en las aulas porque así se garantiza mejor el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, como establece nuestra CE.

Pero el futuro es aún más desalentador después de la entrevista televisiva que le han realizado a **Rajoy** varios periodistas, porque no ha concretado nada sobre la petición de un *rescate* o sobre las medidas económicas que adoptará en el corto y medio plazo, cuando, además, faltan muy pocas semanas para que el Ejecutivo presente ante el Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

Nada dice sobre qué nuevas medidas tributarias establecerá, si recortará las pensiones o si impondrá nuevas reducciones en los derechos sociales y económicos de los funcionarios públicos; lo que provoca una intimidación colectiva sin precedentes.